

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN procede a resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por **BLANCA LUCÍA JIMÉNEZ GÓMEZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-010-2020-00063-01**.

AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico por parte de la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERÍA S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de COLPENSIONES en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada MARYA A. GIRALDO ZULUAGA portadora de la T.P. 190.179 del C. S. de la Judicatura, para que represente a COLPENSIONES en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción judicial, la demandante pretende que declare que el señor JESÚS ANÍBAL ÁLVAREZ ROMÁN dejó causado el derecho a la pensión de sobreviviente, y que como consecuencia de ello, se declare que les asiste derecho en calidad de compañera permanente, al reconocimiento y pago de tal prestación, de manera retroactiva desde el 19 de enero de 2006, con las mesadas adicionales, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o subsidiariamente la indexación, y las costas procesales.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, anota la demandante, que convivió con el señor Jesús Aníbal Álvarez Román de manera singular, permanente, con vocación de continuidad, bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa desde el año de 1969, hasta la fecha del fallecimiento de su compañero el 19 de enero de 2006.

Aduce que fruto de su unión, fueron procreados tres hijos LIDA AMPARO, DORA LIZ ÁLVAREZ JIMÉNEZ, ambas mayores de edad y con sus propios hogares establecidos, y ELKIN ANIBAL ÁLVAREZ JIMÉNEZ ya fallecido.

Relata que el señor Jesús Aníbal Álvarez se encontraba afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES, realizando cotizaciones hasta el 31 de mayo de 2004, fecha para la cual terminó su contrato de trabajo y le fue imposible reubicarse laboralmente por su avanzada edad.

Anota que ante la imposibilidad de seguir cotizando a la seguridad social, el causante solicitó una indemnización sustitutiva de pensión de vejez, la cual fue resuelta favorablemente mediante acto administrativo, concediéndosele la suma de \$4.255.912.

Indica que, para el momento de su fallecimiento del señor Jesús Aníbal Álvarez, acreditaba un total de 443 semanas cotizadas, de las cuales 70 semanas fueron cotizadas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, esto es, entre el 20 de enero de 2003 y el 19 de enero de 2006.

Expresa que el 10 de abril de 2006 solicita la pensión de sobreviviente, la que le fue negada con el argumento que el causante había reclamado la indemnización sustitutiva. Posteriormente el 20 de junio de 2019, reitera el requerimiento pensional, sin que se le haya otorgado la misma, quedando agotada la vía gubernativa.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El *a quo*, despachó favorable las pretensiones de la demanda, condenando a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la actora, en calidad de cónyuge del afiliado fallecido JESÚS ANÍBAL ÁLVAREZ ROMÁN, a partir del 20 de junio de 2016, por efecto de la prescripción de las mesadas

pensionales anteriores. Igualmente condenó a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 21 de agosto de 2019, y las costas procesales.

Para sustentar su decisión, el *a quo* adujo que en este caso se acreditaba que el causante había dejado cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento, un total de 70,714 semanas, de manera que sus beneficiarios podían acceder a la prestación. En cuanto al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez otorgada en vida al causante, señaló que no existía incompatibilidad alguna para que los beneficiarios de la prestación de sobrevivientes, pudieran acceder a dicha prestación, aduciendo que no procedía efectuar compensación alguna.

En cuanto a la calidad de beneficiaria de la demandante, adujo el juez, que la prueba documental y testimonial daba cuenta del derecho que les asistía y por ello condenó a la demandada al pago de la prestación solicitada.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La apoderada judicial de COLPENSIONES recurre la sentencia de primera instancia, solicitando sea revocada, en primer lugar, en lo que tiene que ver con el reconocimiento del retroactivo pensional desde el 29 de junio del 2016, toda vez que si el retroactivo se llegara a causar, sería a partir del 20 de junio de 2019, esto es el mismo día de la reclamación administrativa del reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes, pues Colpensiones al hacer el estudio de la de la prestación, evidenció la incompatibilidad existente, según el Decreto No. 1730 del 2001, que en su artículo 6, indica que las cotizaciones que fueron tenidas en cuentas en el cálculo de la indemnización sustitutiva, no podrán ser reconsideradas para liquidación de otras prestaciones en el sistema general de la Seguridad Social en pensiones, normativa vigente, y el señor Jesús Aníbal Álvarez Román en vida recibió el valor de la suma de \$4'255.900, mediante acto administrativo.

Frente a los intereses moratorios, solicita que se revoque esta condena, toda vez que en sede administrativa no se logró acreditar los supuestos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, observándose lo indicado en la sentencia SL 11897 del 2016, en virtud de la cual Colpensiones también realiza una investigación administrativa que da cuenta de una posible existencia un pago al causante.

Ahora, en caso de que procedan los intereses moratorios, estos solo se causan tratándose de prestaciones de sobrevivientes al tercer mes, de conformidad con lo preceptuado en las sentencia 588 del 2003, la C-1024 del 2004 y las SU05 del 2018, con el fin de analizar el carácter normativo, los intereses moratorios establecido en el artículo 141 de la ley 100, se tomaron los siguientes ejes temáticos, el derecho a la sustitución pensional, a la pensión de sobreviviente en el sistema de la seguridad integral, el texto en literal del artículo 141 y la interpretación constitucional sobre esa norma.

En cuanto a la negativa de la compensación, debe tenerse en cuenta que el actuar de Colpensiones se ajustó a derecho, y tanto es así que por su parte se aportaron todas las pruebas documentales, incluso las que pudieran considerarse a desfavor de la entidad.

Por lo tanto, solicita que se revoquen las condenas del retroactivo, intereses moratorios, costas procesales, si se llegara a sostener que a la demandante le asiste el derecho a una prestación por sobrevivientes. En caso contrario, solicita que se absuelva a su representada de todas las pretensiones incoadas por la demandante.

Finalizó insistiendo que se debe analizar la incompatibilidad entre la indemnización inicialmente sufragada, y la prestación que se viene a reclamar, no restándole menos importante, por lo que solicitó que se revoque el numeral donde se indica que no prospera la compensación, toda vez que sí debe ser aceptada y debe declararse, porque es una devolución de una deuda o digamos, es una suma que fue ya pagada en vida del causante, por lo que Colpensiones de entrada ya sufragó sobre las mismas cotizaciones, lo que vulneraría el sistema financiero.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, la apoderada judicial de COLPENSIONES, presentó alegatos argumentando resumidamente que el artículo 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes.

El artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, inciso (c) dispone: “Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las

prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la presente ley”

Para el estudio de la de la pensión de sobrevivientes, no se pueden tener en cuenta las mismas semanas con las cuales le fue reconocida la Indemnización Sustitutiva de una Pensión de Vejez al señor ALVAREZ ROMAN JESUS ANIBAL, pues de conformidad con el artículo 06 del Decreto 1730 del 2001, las cotizaciones tenidas en cuenta en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán ser consideradas para la liquidación de otras prestaciones en el sistema general de la seguridad social en pensiones.

De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se logró confirmar que el señor Jesús Aníbal Álvarez Román y la señora Blanca Lucía Jiménez Gómez vivieron en unión libre desde el 06 de enero del año 1973 hasta el día 19 de enero del año 2006, fecha en la que falleció el causante.

El asegurado NO DEJO ACREDITADO O CAUSADO los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, para que, en el evento de existir beneficiarios, estos accedan a la pensión de sobrevivientes.

Frente a los INTERESES MORATORIOS del artículo 141 de la ley 100 de 1993, se reconocen cuando se presenta mora en el pago de las mesadas de una prestación. La actora no ha demostrado cumplir con los requisitos establecidos para acceder al beneficio pensional, por lo que, no hay motivos facticos ni jurídicos para su reclamación.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico por resolver se circunscribe a establecer si a la demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes como consecuencia del fallecimiento del señor JESÚS ANÍBAL ÁLVAREZ ROMÁN, y si de tener derecho a la misma, hay lugar a la condena de las mesadas pensionales retroactivas que condenó el *a quo* a pagar, y si estas se deben pagar con los intereses moratorios de que trata el Art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Tramitado el proceso en legal forma y no avizorándose hecho que conlleve a su nulidad, y por ser competente la colegiatura para conocer de la APELACIÓN y

CONSULTA de la sentencia, conforme al art. 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

En principio debería la Sala ocuparse del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia..., deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*, sin embargo no podemos olvidar que el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 impone consultar las sentencia en favor de COLPENSIONES, cuando le resulten adversas, por lo que la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Sea lo primero manifestar que, en este proceso se encuentra probado que mediante Resolución No.018646 del 24 de octubre de 2004, al señor JESÚS ANÍBAL ÁLVAREZ ROMÁN le fue reconocida y pagada de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en suma de \$4'255.912.00 pesos (página 21 y 22 del archivo 02. ExpedienteOrdinarioLaboral).

Por la anterior razón, aduce la demandada COLPENSIONES, que no es procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues para el momento del deceso el causante había dejado de ser afiliado de la entidad para los riesgos de invalidez, vejez y muerte –en adelante IVM-.

Frente al anterior tema, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tiene sentada una interpretación pacífica y reiterada, según la cual las prestaciones de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la pensión de sobrevivientes son compatibles, por tratarse de contingencias distintas cubiertas por las cotizaciones a los riesgos de IVM.

En la sentencia SL16169-2015, la Sala de Casación Laboral insistió en este criterio citando las sentencias del 25 de marzo 2009 radicación 34.014 y la SL 9769–2014, según el cual, no existe incompatibilidad alguna entre la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que recibió el causante, y la pensión de sobrevivientes que corresponde a los beneficiarios de éste, siempre que cumplan con las exigencias legales para acceder a ese derecho.

Así las cosas, no existe incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva de pensión de vejez y la pensión de sobrevivientes, ya que la causa y origen de cada derecho es diferente, en tanto la primera ampara el riesgo de vejez, es decir, es consecuencia del cumplimiento de la edad legalmente establecida y la imposibilidad de continuar cotizando para completar el número de semanas requeridas para obtener la pensión de vejez, y la segunda ampara el riesgo de muerte y se causa por la muerte del afiliado, por tanto, el reconocimiento que se haga de dicha indemnización no afecta la causación de la prestación de sobrevivientes, por cuanto ampara riesgos disímiles y por tanto, se soportan en exigencias legales diferentes, por lo que puede concluirse que quien recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, queda excluido del seguro social obligatorio por esta contingencia, es decir la de vejez, pero el afiliado y sus beneficiarios siguen amparados por los riesgos de invalidez y muerte por ser contingencias distintas que amparan la misma cotización.

El anterior criterio ha sido sostenido de manera reiterada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en sentencias SL11234-2015, SL1416-2019 y SL4064-2019, por lo que, siendo un criterio pacífico del órgano de cierre de la justicia ordinaria laboral, debe desestimarse este aspecto de la apelación de COLPENSIONES.

Ahora respecto del Artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, citado en los alegatos de COLPENSIONES, como fundamento, de la referida incompatibilidad alegada por esta entidad, tal norma legal es del siguiente tenor:

“ART. 6º—**Incompatibilidad.** Salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.

Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto.”

Como se puede observar, la referida norma legal establece una incompatibilidad entre las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, con las pensiones de vejez y de invalidez, pero nada dice de la pensión de sobrevivientes.

Se pasa entonces a verificar si la actora cumple con los restantes requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deprecada.

Así, como quiera que el causante de la pensión de sobrevivientes demandada falleció el **19 de enero de 2006**, como se prueba con el registro civil de defunción obrante a

folio 13 del archivo 02.ExpedienteOrdinarioLaboral, la norma a aplicar para definir el derecho que tengan o no la demandante a la pensión de sobrevivientes, es el artículo 46 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual establece lo siguiente:

*“ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:*

(...)

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.

Acorde con lo expresado en precedencia, conforme al reporte de semanas cotizadas por el causante, cotizó entre el **16 de enero de 2003** y el **16 de enero de 2006**, esto es, dentro de los 3 años anteriores a la fecha de su deceso, un total de 495 días que corresponden a 70,7 semanas, por lo que cumple el causante con el requisito de 50 semanas cotizadas en los tres (3) años anteriores al fallecimiento para que sus beneficiarios pueden acceder a la pensión de sobrevivientes.

Ahora, sobre las condiciones que debe cumplir la demandante para ostentar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, el artículo 47 de la ley 100 de 1993, mod. por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, en sus literales a) dispone que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, y que en caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

A pesar de la anotado en precedencia, se debe poner de presente que desde el año 2011, la Sala de Casación Laboral (en adelante SCL) de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia 40055 del 29 de noviembre de 2011, M.P. Dr. GUSTAVO JOSÉ GENEKO MENDOZA, posición que ha sido ratificada en posteriores sentencias, al interpretar el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha precisado que los 5 años de convivencia cuando se trate de esposos, es decir, de personas que contrajeron matrimonio, para hacerse acreedor a la pensión de sobrevivientes, no debe haber ocurrido necesariamente en los últimos cinco (5) años, sino en cualquier tiempo siempre que sea continua durante 5 años.

Para el caso de la compañera o compañero permanente supérstite, en un principio, la jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que debía acreditarse, que estuvieron haciendo vida marital con el o la causante hasta su muerte, y haya convivido con el o la fallecida no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte, sin importar que el o la causante fuera pensionado o afiliado.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL1730 de 2020, revaluó la posición jurisprudencial, sobre la exigencia de los cinco años de convivencia para hacerse acreedor a la pensión de sobrevivientes cuando se tratara de un afiliado al sistema pensional, para realizar una nueva interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, advirtiendo que el mínimo de convivencia de 5 años se aplica únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado, pero que en el caso de los afiliados: *“... no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia...”*. Además, se precisó en la citada Sentencia que para efecto de lo consagrado en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, *“no hay lugar a efectuar ninguna distinción entre beneficiarios de un mismo tipo de causante, para el caso un afiliado, esto es, según la forma en la que se constituya el núcleo familiar, si lo es por vínculos jurídicos o naturales, en tanto éste, es decir, el núcleo familiar, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social.”*

El anterior criterio fue ratificado en las Sentencia SL3626-2020, SL3785-2020 y SL4008-2020.

No obstante, la Corte Constitucional en la sentencia SU-149 de 2021, dejó sin efectos la providencia SL1730 de 2020, al concluir que en ella se incurrió en defecto sustantivo por interpretar irrazonable del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al sostener que no es necesario acreditar un tiempo de convivencia con el causante de la pensión cuando se trataba de afiliados al sistema pensional, sino solo estar conformando una familia con vocación de estabilidad al momento del deceso del causante, lo que consideró la Corte Constitución, contradice los principios de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional que además produce resultados desproporcionados respecto de la protección de la familia y las finalidades de la pensión de sobrevivientes.

Además, se argumentó en la citada sentencia de unificación que la Sentencia SL1730 de 2020, incurrió en desconocimiento del precedente, de la Corte Constitucional fijados en la sentencia SU-428 de 2016, apartándose la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indebidamente de esa decisión, sin cumplir con las cargas de transparencia y suficiencia de la argumentación, pues no se refirió explícitamente su apartamiento del precedente fijado por la Corte Constitucional, ni mucho menos expuso en forma adecuada las razones por las cuales su postura divergente garantizaba de mejor modo los principios y valores constitucionales involucrados, a pesar de que se trataba de un fallo de unificación que determinaba, con carácter vinculante, el contenido y alcance del derecho a la seguridad social ante el problema jurídico materia de decisión en el asunto de la referencia.

En ese orden de ideas, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ya ha acogido esta Sala del Tribunal, en este asunto, acorde al material probatorio, se analizará el requisito de convivencia de la demandante y el causante, por un lapso no inferior a cinco años ininterrumpidos con anterioridad al deceso del causante.

La demandante, rindió interrogatorio de parte, manifestando que vivió en unión libre con el señor JESÚS ANIBAL por más de 30 años, unión marital de la cual procrearon 3 hijos ya mayores de edad, uno de ellos fallecido. Afirmó la actora que nunca se separó de su compañero permanente,

La demandante también trajo como testigos OLGA LUCÍA ECHEVERRI ECHEVERRI Y RAÚL FORTUNATO JIMÉNEZ BEDOYA, quienes al unísono manifestaron que conocían la pareja conformada por el señor JESÚS ANIBAL y la señora BLANCA LUCIA desde hace 25 o 35 años, respectivamente y en razón de vecindad; que desde que los conocieron éstos ya vivían juntos. Afirmaron que la pareja tuvo tres hijos todos mayores de edad. Dijeron que el señor JESÚS ANIBAL se encargaba de todos los gastos del hogar, que la pareja siempre vivió junta, nunca se llegaron a separar, no les conocieron otras parejas o hijos, que vivían en casa propia, y que antes del fallecimiento del señor JESÚS ANIBAL éste estuvo muy enfermo y lo cuidó su compañera e hijas.

Valorados los testimonios traídos al proceso, encuentra esta Sala que, como lo concluyó la Juez de primera instancia, con estos se acredita suficientemente que entre el causante JESÚS ANIBAL ÁLVAREZ ROMÁN y la señora BLANCA LUCIA JIMÉNEZ GÓMEZ existió una relación de pareja que duró aproximadamente 32 años y que

perduró hasta el momento del fallecimiento del causante en el año 2006, sin que entre éstos hubiese mediado separación alguna.

Además de lo dicho, en el proceso también reposa copia de la investigación administrativa efectuada por Colpensiones con ocasión del fallecimiento del señor Jesús Aníbal Álvarez Román, en la que se concluyó que, se lograba confirmar que el señor Jesús Aníbal Álvarez Román y la señora Blanca Lucía Jiménez Gómez vivieron en Unión libre desde el 6 de enero del año 1973 hasta el día 19 de enero del año 2006, fecha en la que falleció el causante.

Corolario de lo anterior, se confirmará en esta instancia la decisión del *a quo* de condenar a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la demandante en calidad de compañera permanente.

Ahora, aduce el apoderado de COLPENSIONES en el recurso de alzada, que no le asiste derecho a la demandante a disfrutar de la prestación de sobreviviente desde el 29 de junio del 2016, puesto que si un retroactivo se llegará a causar sería a partir del 20 de junio de 2019, esto es el mismo día de la reclamación administrativa del reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes, sin explicar por qué.

Si bien el derecho a la pensión a la actora se causa, en la fecha del deceso del causante el 19 de enero de 2006, es necesario estudiar el fenómeno jurídico de la prescripción, el que se encuentra regulado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, los que disponen un término de 3 años para que los derechos a la seguridad social que no tengan un término especial se vean afectados por este medio extintivo.

Así las cosas, la actora solicitó la pensión de sobreviviente por el deceso de su compañero, el día 10 de abril de 2006, prestación que le fue negada mediante resolución No. 10008 24 del 23 de mayo de 2007, notificada el 5 de junio de 2007 (página 4 del expediente administrativo- EXPEDIENTE REPARTO 1619). Posteriormente la accionante eleva una nueva solicitud pensional el 20 de junio de 2019, la cual le fue resuelta negativamente negada mediante Resolución No. SV 201033 del 29 de julio de 2019, y demandó el 10 de febrero de 2020 (fl.1 archivo02ExpedienteOrdinarioLaboral), razón por la cual las mesadas consolidadas con antelación al **20 de junio de 2016**, se encuentran afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción.

Respecto de la situación en la que se solicita la pensión en múltiples oportunidades, interrumpiéndose la prescripción con la última, se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la CSJ en la Sentencia SL944-2023, Radicación: 90786 de mayo 3 de 2023 en los siguientes términos:

“Así mismo, se tiene que de conformidad con los artículos 151 del CPTSS y 488 y 489 del CST, el fenómeno de la prescripción extintiva opera por el transcurso del tiempo, exactamente pasados tres años contados desde que surge la respectiva obligación, la cual se puede interrumpir con el simple reclamo escrito del afiliado, por una sola vez, momento a partir del que comienza a contarse de nuevo el trienio señalado en las disposiciones citadas.

Igualmente, teniendo en cuenta que la pensión de vejez es una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, es claro que se pueden presentar múltiples interrupciones, ya que cada mesada pensional tiene un término de contabilización. Esto es así porque cuando la norma se refiere a que la interrupción se da por una sola vez, debe entenderse que es con respecto a cada mensualidad u obligación, de manera que, efectuada la reclamación, el término se interrumpe respecto de las mesadas causadas hasta esa fecha.

Se itera que cuando la legislación laboral precisa que la interrupción del término prescriptivo se da por una sola vez, ello es así cuando se trata de una acreencia exigible en única fecha, pero en el caso de las mesadas pensionales, cada una de ellas corre conforme a su propia data de exigibilidad, teniendo en cuenta que es una prestación de tracto sucesivo. De ahí que, la reclamación solo puede interrumpir el plazo frente a las causadas hasta ese momento, no las posteriores porque aún no se han consolidado y, por consiguiente, no son exigibles.

Sobre el particular, en Sentencia CSJ SL794-2013 se explicó:

Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones del Tribunal, a juicio de la Sala éste no se equivocó, pues fue claro en puntualizar que la prescripción solo se podía interrumpir por una sola vez, salvo en los casos que la prestación tuviera una causación periódica, en que se podían presentar múltiples interrupciones, teniendo en cuenta que cada prestación tenía un término de contabilización, lo que es lógico si se tiene en cuenta que, cuando la norma se refiere a que la interrupción se da por una sola vez, debe entenderse que es con respecto a una misma prestación, vale decir, en el caso de las pensiones, respecto a unas mismas mesadas, de manera que efectuada la reclamación, el término se interrumpe respecto de las mesadas causadas hasta esa fecha, no las posteriores, porque aún no se han causado y mal se haría en entenderse interrumpido el tiempo cuando aún no ha empezado a correr, ni ninguna reclamación se ha hecho respecto a su pago. De ahí que sea posible la interrupción del término prescriptivo en un futuro, respecto a estas nuevas mesadas, cuyo concepto es independiente, en la medida que la causación es diferente.

Entonces, atendiendo los lineamientos jurisprudenciales, siendo un hecho indiscutido que el señor Ernesto Carvajal López solicitó por primera vez el reconocimiento de la pensión el 9 de noviembre de 1999, momento para el cual ya tenía consolidado el derecho, es evidente que tal como lo indicó el sentenciador de segundo grado, dicha reclamación «tuvo la virtualidad de interrumpir el término prescriptivo de las mesadas pensionales exigibles desde el 20 de marzo de 1999 por una sola vez y por espacio de 3 años».

Por tanto, para que la misma surtiera efectos jurídicos, el actor estaba compilado a instaurar la correspondiente acción ante la jurisdicción laboral dentro de los tres años

posteriores a la expedición de la Resolución SUB849 de 2000 cuando el entonces ISS le reconoció la indemnización sustitutiva, circunstancia que en el presente caso no aconteció y, por consiguiente, no se advierte error alguno por parte del sentenciador en cuanto consideró que solo la segunda reclamación interrumpió la prescripción de las mesadas pensionales.

Ahora, como el actor presentó la segunda reclamación hasta el 7 de febrero de 2018, esta tuvo la virtualidad de interrumpir el término de prescripción frente a las mesadas causadas desde el mismo día y mes de 2015, tal como decidió la entidad accionada en el acto administrativo mediante el cual reconoció el retroactivo pensional al actor, determinación que fue avalada por el Tribunal en la sentencia fustigada.

Así las cosas, concluye la Sala que el sentenciador de segundo grado no cometió el yerro jurídico enrostrado, pues es claro que en el presente caso la interrupción de la prescripción solo operó con la segunda reclamación presentada por el actor respecto de las mesadas causadas después del 7 de febrero de 2015.”

Por las razones anteriores, se confirmará la sentencia del *a quo*, en cuanto declaró prescritas las mesadas pensionales causadas con antelación al 20 de junio de 2016.

En relación con la **cuantía de la pensión**, como a bien lo dijo la juez de primera instancia no se requiere realizar liquidaciones, para fácilmente concluir que el mismo corresponde al salario mínimo legal mensual, pues como se pudo apreciar en la historia laboral de la accionante, cotizó al sistema pensional durante toda su vida con un ingreso base de cotización del salario mínimo legal, por lo que el monto de la pensión sería inferior al salario mínimo legal, sin embargo conforme al Artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, ninguna pensión pueden ser inferior a dicho salario.

La demandante tiene derecho a 14 mesadas pensionales al año, conforme lo preceptuado por el **Parágrafo transitorio 6, del Acto Legislativo 01 de 2005**, ya que el derecho se causó con antelación al 31 de julio de 2011 y en una cuantía inferior a tres salarios mínimos.

Liquidado el retroactivo pensional causado entre el 20 de junio de 2016 y el 31 de enero de 2022, del que se produjo la sentencia de primera instancia, en el monto de \$63.923.652, el mismo se encuentra correctamente liquidado.

Continuando con el análisis de los puntos objeto de apelación, encontramos que la apoderada de Colpensiones manifestó inconformidad con el reconocimiento y pago de los **intereses moratorios** de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Al respecto la SCL de la Corte Suprema de Justicia, tiene establecido que los aludidos intereses, se causan desde que se vence el término legal con el que cuentan las administradoras de pensiones para reconocer y pagar la pensión, el que conforme al

Art.1 de la Ley 717 de 2001, para el caso de las pensiones de sobreviviente es de dos (2) meses.

No óbstate lo anterior, también ha precisado la SCL de la Corte Suprema de Justicia, que no hay lugar al reconocimiento de los intereses, cuando el derecho se niega en aplicación de forma minuciosa de la Ley, aunque el juez posteriormente aplicando una interpretación distinta, o jurisprudencial otorgue el derecho.

Sobre el tema en cuestión, la SCL de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SL3087-2014, reiterada en fallo CSJ SL11234-2015, refiriéndose a que los intereses no proceden cuando se ha dado aplicación estricta a lo establecido por la Ley, adoctrinó:

(...) La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia.

En este caso, COLPENSIONES dio aplicación minuciosa a lo establecido en el Literal d) del Art, 2 del Decreto 758 de 1990, que preceptúa lo siguiente:

“Artículo 2° PERSONAS EXCLUIDAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. Quedan excluidos del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte:

[...]

d) Las personas que se hayan pensionado por el Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios o hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la

pensión de vejez o de invalidez por riesgo común, salvo para el caso de invalidez, que ésta hubiere cesado o desaparecido, en virtud de los programas de readaptación y rehabilitación por parte del Instituto;”

Como se puede apreciar, en principio COLPENSIONES con base en la anterior norma legal, podía entender que el causante estaba excluido de los seguros de IVM al haber recibido antes de fallecer, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y es solo ante una interpretación jurisprudencial que se le otorga la pensión a la demandante, por lo que a juicio de la Sala, no hay lugar a los intereses moratorios, y por ello esta condena será revocada.

Al revocarse la condena a los intereses, se hace necesario decidir sobre la pretensión de la indexación, la que es procedente, por razones de justicia y equidad, por cuanto con esta lo que se pretende es actualizar la depreciación monetaria causada por el retardado o inoportuno pago de las mesadas pensionales, lo que es justo en una economía inflacionaria como la nuestra, por lo que las mesadas pensionales retroactivas que se condena a pagar a COLPENSIONES deberán la indexarse conforme la siguiente fórmula:

$$VA = Vh \times \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

En la que VA (valor actualizado) es igual a la mesada pensional dejada de percibir por la demandante (Vh), multiplicada por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente en el mes anterior al pago, por el índice inicial, vigente en el mes de causación de cada mesada.

De otra parte, sobre las mesadas pensionales retroactivas que pague a COLPENSIONES a la demandante, como de manera acertada lo indicó la a quo, se debe realizar el descuento del porcentaje legal del aportes al sistema de salud, porcentaje sobre el cual no se causa la indexación, pues la misma, deben liquidarse sobre el monto de la pensión que legalmente le pertenece pensionado, que es el que en realidad dejó de percibir, y sobre el que se puede causar la devaluación monetaria que se resarce con la indexación, por lo que si el pensionado recibe indexación sobre el porcentaje del aporte al sistema de salud, que en todo caso no habría recibido aún en el evento que la pensión hubiera sido pagada oportunamente, constituiría un enriquecimiento sin causa, adicionándose lo anterior.

En cuanto a la condena en costas que impartió el *a quo* en contra de la demandada Colpensiones, y a la cual se opone esta entidad en la apelación, considera la Sala que la misma debe ser confirmada, en tanto esta se encuentra acorde a la norma legal que a la fecha de la sentencia de primera instancia reglaba lo referente a la condena en costas, la cual es el Artículo 365 del CGP el cual dispone lo siguiente:

“Artículo 365. Condena en costas. *En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:*

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.”

En este caso, como Colpensiones fue vencida en el proceso, era procedente la condena en costas.

Finalmente, requiere la recurrente que se tenga en cuenta que no se puede pasar por alto que COLPENSIONES en la contestación de la demanda presentó como excepciones la de COMPENSACIÓN, medio exceptivo que el juez de instancia consideró no procedente, no obstante, a consideración de la Sala, sí resulta pertinente descontar del valor del retroactivo pensional que le sea pagado a la demandante, lo cancelado al causante por indemnización sustitutiva de vejez debidamente indexado, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues los aportes del afiliado son uno solo para los riesgos de IVM, por lo que concedida la indemnización por cualquiera de estos riesgos, al nacer el derecho a otra prestación, se debe compensar lo pagado con la nueva prestación reconocida y por ello debe prosperar la excepción de COMPENSACIÓN formulada por la entidad demandada.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, se CONFIRMARÁ, MODIFICARÁ, ADICIONARÁ Y REVOCARÁ la sentencia de primera instancia apelada y consultada en favor de Colpensiones, en los términos anteriormente expuestos.

Sin costas en esta instancia, por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación de COLPENSIONES.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de febrero de 2022 proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **BLANCA LUCÍA JIMÉNEZ GÓMEZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**, en cuanto condenó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a partir del 20 de junio de 2016.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de primera instancia en cuanto condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar los intereses moratorios a la demandante, para en su lugar ABSOLVER a esta entidad de esta pretensión.

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a indexar las mesadas pensionales retroactivas que le deba pagar a la demandante, utilizando la formula indicada en la parte motiva del presente fallo.

CUARTO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia en el sentido de que de cada una de las mesadas pensionales retroactivas que le sean canceladas a los demandantes, se descuente el porcentaje legal para el sistema de salud, porcentaje sobre el que no se causa indexación a favor de los accionantes.

QUINTO: Se **DECLARA** probada la excepción de COMPENSACIÓN. En consecuencia, se autoriza a COLPENSIONES, descontar del retroactivo pensional que le pague a la demandante, el valor de \$4.255.912. cancelado al causante JESÚS ANÍBAL ÁLVAREZ ROMÁN por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez debidamente indexado, conforme a las consideraciones expuestas.

SEXTO: Sin costas en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **78d3f5b7b42c1159bf9c7a928f249d2f8f726116096678763269f48d7142e38a**

Documento generado en 20/10/2023 03:19:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>